A stylized graphic featuring a light green globe with darker green landmasses. A large, dark green number '4' is centered over the globe. A thick, dark green swoosh curves over the top right of the globe. A thin white line forms a circle around the globe, with two small white dots at the top and bottom.

4

**Persecución de los activistas
ambientales y animalistas:
¿son los nuevos terroristas?**

Persecución de los activistas ambientales y animalistas: ¿son los nuevos terroristas?

Miriam Ruiz Arias - Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria. correo: miriam.ruiz@tdea.edu.co

Introducción

El terrorismo medioambiental o animalista lo integran personas que solamente persiguen un fin (Pérez, 2016), es decir, que llevan a cabo actuaciones violentas con el fin de cambiar una política concreta o una práctica en una sociedad determinada (Europol, 2008), y así queda también englobado en ideologías como el anarquismo y el comunismo. Los integrantes de estos grupos radicales ambientalistas o animalistas que actúan en este contexto de terrorismo, lo hacen porque consideran que la naturaleza y los seres animales que la conforman se encuentran en peligro, de lo cual son responsables los gobiernos y las grandes empresas, y destacan, además, que el sistema político es incapaz o carece de la voluntad de cuidar el ambiente para conservar la biodiversidad.

Estos individuos también pretenden lograr una justicia animalista en la que desaparezca el especismo, o lo que es lo mismo, buscan eliminar la discriminación existente entre los seres humanos y los animales o alcanzar la justicia

ambiental; esta última tiene como objetivo conseguir la equidad en el reparto de beneficios y perjuicios medioambientales, además de proteger el derecho a un ambiente sano (Eagan, 1996; Ellefsen, 2012).

Conviene insistir en el marco en el que se produce este fenómeno. Debe tomarse en consideración que los movimientos ambientalistas y animalistas colaboran con la identificación, detección y prevención del delito medioambiental e, igualmente, son quienes impulsan acciones para que la legislación y las políticas ambientales mejoren. Pero, al mismo tiempo, estos movimientos son también objeto de persecución por el Estado y por las corporaciones por sus ideas contrarias al sistema económico capitalista vigente (Walters, 2017).

Esta situación de criminalización se enmarca en una sociedad considerada de riesgo en la que los individuos, por el mal estado de la naturaleza, se ven privados de los beneficios económicos, sociales y culturales que la naturaleza otorga (lo cual, muchas veces, se acompaña del peligro que acarrearán sobre la seguridad nacional los delitos medioambientales) y, al mismo tiempo, son perseguidos, si no directamente criminalizados, por la manera como reivindican terminar con esa situación.

En este capítulo se analiza lo que se entiende por terrorismo de manera general, posteriormente se estudia el fenómeno del ecoterrorismo, destacando la regulación legal existente en Estados Unidos y el tratamiento que se da al fenómeno en la Unión Europea y en el Código Penal español. Para concluir, se presentan algunas consideraciones sobre el tratamiento jurídico que merecen las conductas llevadas a cabo por los grupos ambientalistas y animalistas.

Terrorismo: breve repaso al concepto

El término *terrorismo* plantea amplios debates desde hace décadas en diferentes ciencias sociales (Historia, Ciencia Política, Filosofía, Criminología, Derecho, etc.), pero no existe un consenso en la doctrina sobre su significado (Smith, 2014). De ahí que se pueda afirmar que existen diferentes definiciones del concepto, valga por caso la que emplea el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start, 2017, p. 2), que lo define como “la amenaza o el uso real de fuerza ilegal y violencia por un actor no estatal para lograr un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coerción o la intimidación.”¹ (Traducción propia).

Otros autores señalan que el terrorismo es “el terror o la intimidación sistemáticos infundados por un individuo o grupo hacia otro grupo habitualmente caracterizado por un acto de destrucción o violencia.”² (Lovitz, 2007, p. 80) (Traducción propia). Igualmente, Smith (2014) entiende el terrorismo como “toda aquella violencia con motivación política que se lleva a cabo de una manera clandestina en contra de no combatientes”³ (p. 19) (traducción propia). Se puede deducir, en efecto, que el terrorismo contiene los siguientes elementos: el ejercicio de la violencia, una finalidad política, y que la violencia se ejerce sobre las personas o sobre un grupo de personas.

1 “The threatened or actual use of illegal force and violence by a non-state actor to attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion, or intimidation.”

2 “The systematic threatening or intimidating of one individual or group to another, usually characterized by an act of destruction or violence.”

3 “Politically motivated violence perpetrated in a clandestine manner against non-combatants.”

No se puede obviar que a lo largo de la historia, la legislación que ha descrito el delito de terrorismo se ha empleado para perseguir y criminalizar la violencia política, y esto ha quedado reflejado en las últimas décadas en el derecho penal de autor (Pérez, 2016). Definir lo que se entiende por terrorismo también tiene un aspecto cultural y la definición muestra el poder del Estado para señalar algunas conductas como adecuadas social y jurídicamente (Paredes, 2016).

Considerando sus connotaciones en las diferentes sociedades y su origen político, el término terrorismo ha sido altamente discutido en distintas instancias internacionales, por ende, figura en múltiples convenios internacionales y en la Unión Europea (UE), para lograr el mayor consenso posible en la adopción de políticas. Respecto de la UE se han enumerado, en cuanto a la ejecución de actuaciones, una serie de infracciones de carácter penal que, en determinadas circunstancias, se tienen que considerar como delitos de terrorismo en cada Estado miembro (Sanz, 2016).

Más todavía, los gobiernos de los países consideran que con el sistema de justicia penal moderno ordinario no se puede hacer frente al terrorismo internacional, tampoco al nacional o doméstico. Por lo tanto, estiman oportunas una serie de medidas excepcionales y además exigen el adelantamiento de la protección penal, lo que da pie a que elementos de la fase preparatoria de la acción formen parte de la ejecución del delito, incluso que, en algunos casos, el momento previo a esta fase preparatoria también suponga el tipo penal de terrorismo (Ellefsen, 2012; Pérez, 2016).

En España, en el Código Penal⁴ se recoge, entre los múltiples tipos penales de terrorismo existentes, un conjunto de delitos graves que atentan contra bienes jurídicos individuales y colectivos, entre ellos los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando la finalidad sea cualquiera de las siguientes: subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a que realicen actos o a que se abstengan de hacerlos; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; por último, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella (Código Penal Español, 1995, Artículo 573)⁵.

4 En 2015 se opera una reforma del Código Penal Español a través de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo (BOE n.º 77, 31/03/2015) antes de que se aprobase y entrase en vigor la Directiva Europea 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DOUE L 88/6; 31/03/2017).

5 Artículo 573.1 del Código Penal Español señala: Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.^a Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.^a Alterar gravemente la paz pública.

3.^a Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.^a Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Lo fundamental es el elemento intencional, independientemente de que sea un terrorista individual o un grupo y aunque se realice de forma esporádica (Sanz, 2016). Parece que la reforma legal penal de 2015 empezó a castigar no solo la radicalización y el extremismo violento como terrorismo, sino también la fase previa de identificarse con unas determinadas ideas o con una concreta ideología.

Es cierto que esta reforma legislativa de 2015 estuvo influida por todos los acontecimientos posteriores a lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, porque para poder explicar el terrorismo fue central el fenómeno de la radicalización y este fenómeno termina por igualarse con fenómenos diferentes como el extremismo y la violencia política o terrorismo.⁶

Se entiende que el legislador español confunde una serie de medidas preventivas frente al radicalismo y el extremismo que se tenían que haber tomado en otro campo y en ramas del ordenamiento como el derecho administrativo o el derecho civil, con los límites además del derecho penal garantista, cuya función primordial es la protección de los bienes jurídicos frente a los ataques más graves (Pérez, 2016; 2017). Podría constatarse, en efecto, que el legislador español emplea el principio de precaución (cuyo origen es la protección del medio ambiente y del consumidor en un contexto de sociedad de riesgo donde existen riesgos complejos de medir e impredecibles) también en el delito de terrorismo, lo cual también sería extensible a otros países de la UE.

6 Pérez atinadamente afirma que deben distinguirse tres categorías: radicalización, definida como el proceso de sociabilización marcado por vectores de intransigencia; extremismo, que se entiende como una adscripción a un ideario político no moderado; por último, el terrorismo, que es la utilización de métodos violentos indiscriminados contra la población con vistas a obtener determinados objetivos políticos, con una categoría intermedia que puede ser el extremismo violento (2016, pp. 175-176, 182 y 194). (En sentido similar, cf. Salter, 2011, p. 216).

Dicho de otra manera, en un contexto de gran incertidumbre ambiental (porque no se sabe si los cambios en el clima permitirán el mantenimiento de especies de flora y fauna además del mantenimiento de la economía) o incertidumbre en la seguridad (dado que los movimientos migratorios o la delincuencia organizada pueden alterar la seguridad de los Estados), se toman medidas penales para protegerse de las posibles consecuencias nocivas que generan algunos grupos (como los ambientalistas o los animalistas). A estos grupos se los considera como riesgosos porque ponen en práctica los derechos y libertades y porque están vinculados a determinada ideología. En relación con la criminalización de estos activistas, es necesario enfatizar que las personas que forman parte de estos grupos no son miembros de un comando o grupo terrorista (Pérez, 2016).

Desde luego, como se mencionó anteriormente, el principio de precaución se aplica en el campo medioambiental en situaciones de incertidumbre científica sobre procedimientos técnicos o tecnológicos que afectan a grandes masas de población. Este principio permite fundamentar tanto la decisión de las autoridades públicas en aquellas situaciones de incertidumbre en la naturaleza como los efectos de dicha decisión, de modo que se puedan habilitar medidas excepcionales, para lo cual existen dos fases: la de evaluación y la de gestión del riesgo (Pardo, 2017).

Dicho esto, también debe destacarse que el principio de precaución es un principio informador y limitado en el derecho penal ambiental, sin ir más lejos, se ha empleado en los tipos penales medioambientales al aumentar los delitos que se pueden cometer por imprudencia o cuando su redacción comprende los tipos de peligro

abstracto, haciendo que el derecho penal se convierta en administrativo. Esto último es inaceptable, porque al no existir un peligro concreto ni tampoco una lesividad del bien jurídico se vulnera el principio de lesividad de bienes jurídicos y porque se pasa a proteger la actuación administrativa del Estado. Igualmente, se vulnera el principio de culpabilidad al hacer responsable al sujeto de las conductas de otras personas.

Planteado de esta manera, se puede afirmar que se produce una contradicción con este principio, dado que nace para proteger a las personas ante ciertos riesgos ambientales desde el derecho administrativo, y termina siendo aplicado por el derecho penal sobre aquellas personas que exigen un cambio de paradigma en el cuidado del planeta y en los derechos ambientales de tercera o cuarta generación. Se puede inferir que se está ante un derecho penal de autor que restringe las garantías jurídico-penales de aquellos que considera enemigos, y la barrera penal se adelanta hasta el punto de que el pensamiento ya delinque y se confunden fenómenos diferenciados como la radicalización, el extremismo y el terrorismo. Además, empleando el principio de precaución, este derecho penal actúa frente a determinados individuos que no le son cómodos al Estado, ya que les considera un riesgo con efectos impredecibles frente a bienes como el patrimonio o la propiedad privada.

Surge así la necesidad de exponer la propuesta doctrinal que se defiende en este escrito para definir el concepto de terrorismo, con base en la formulada por Pérez, quien lo define como:

Aquel delito cometido por un sujeto que realiza un ataque indiscriminado contra bienes jurídicos fundamentales de las personas o grupo de

personas, lesionando las normas básicas de la convivencia democrática o que impida el ejercicio de derechos fundamentales o las libertades públicas, desde una organización que utiliza la violencia con la finalidad de destruir las bases en las que se fundamenta el modelo de Estado justo en el que todas las personas puedan disfrutar de los derechos humanos. (2017, p. 337)

Siguiendo este entendimiento, el sujeto activo no será un solo individuo o “lobo solitario”, sino que será una persona que forma parte de una organización terrorista, se comporta conforme a sus directrices, persigue los objetivos del grupo, posee vínculos estables en la organización, y asume la jerarquía y disciplina del grupo terrorista. De igual forma, el sujeto activo debe conocer todos los elementos del tipo objetivo y además tener la voluntad de querer realizarlos, teniendo en consideración que el dolo debe comprender actuar con la misma finalidad política que la organización, es decir, eliminar o destruir un modelo de Estado en el cual todas las personas disfrutaran de los derechos humanos (Pérez, 2017).

En este escrito se interpreta el terrorismo como aquel delito que supone un ataque indiscriminado contra bienes jurídicos fundamentales de las personas, que da lugar a la lesión de las condiciones básicas de convivencia en una sociedad democrática o al impedimento del ejercicio de derechos y libertades básicas, con el objetivo de destruir los fundamentos de un Estado social y democrático de derecho. Así entendido, se hace posible la protección de la convivencia democrática o el ejercicio de derechos básicos, y se deja a otros tipos penales la protección de la propiedad o la seguridad colectiva.

En definitiva, en este trabajo se parte de un derecho penal más garantista que tiende a proteger bienes jurídicos relevantes para el ser humano, porque exige hechos ejecutivos penalmente relevantes y evita sancionar la simpatía o afinidad por determinadas ideologías, aunque se puedan considerar como muy radicales.

Ecoterrorismo y terrorismo animalista

Los movimientos radicales y extremistas defensores del medio ambiente y de los animales (más conocidos por sus siglas en inglés REAR: Radical Environmentalist and Animal Rights movements) son originarios del Reino Unido, aunque la legislación más conocida y la de mayor impacto sobre ellos se haya desarrollado en los Estados Unidos. Este movimiento nació en los años setenta y lo constituían individuos, grupos y organizaciones que, mediante el ejercicio de actuaciones al margen de la ley, querían mostrar la destrucción del planeta y el abuso que sufren los animales, y además pretendían acabar con esa destrucción y abuso. Las personas que forman parte de estos grupos estiman que el reparto de poder existente afecta de manera negativa a mujeres, minorías étnicas y a otros grupos socialmente marginados. Bien entrados los años ochenta, estos grupos se expandieron hacia Norteamérica, y hoy en día existen por toda Europa, siendo los casos más representativos los de Países Bajos, Francia, Grecia y Alemania (Hirsch y Mudde, 2014).

Durante la década de los ochenta, se dio un conflicto entre los grupos ambientalistas que exigían leyes más favorables al medio ambiente —y en las pocas ocasiones que lo lograban se reducían los beneficios económicos de las grandes empresas— y un sector industrial que, para hacerles frente, exigía que se criminalizaran dichos

movimientos ambientales, momento en el cual surgió uno de los primeros usos del vocablo *ecoterrorismo* (Smith, 2014; Sauvart et al., 2016).⁷ Es necesario recordar, respecto de esta última afirmación, que estos movimientos animalistas o ambientalistas ejercen una gran influencia sobre la política económica de Estados Unidos, dado que critican uno de los pilares de su sistema económico capitalista. En otras palabras, son críticos con respecto a la idea de que los recursos naturales solo sean cuantificables económicamente y que su valor dependa del rendimiento que se pueda obtener de ellos. Esta crítica afecta a grandes conglomerados empresariales como los de la agroindustria, que pueden ver reducida su rentabilidad como consecuencia de una política ambiental mucho más proteccionista.

En este sentido, conviene recordar que actualmente existe otra acepción del término *ecoterrorismo*, la cual es empleada por los movimientos de ideología izquierdista para calificar los daños medioambientales o contra los animales cometidos por las empresas y el Estado. Dicho de otra manera, con el paso de los años el término ha evolucionado y no solamente se emplea con una connotación negativa por parte del espectro político de la derecha, sino también de la izquierda (Buell, 2009). El empleo de esta terminología, ya sea en el ámbito social y/o el jurídico, tiene que categorizarse de forma negativa, como ocurre con fenómenos similares (terrorismo

7 De manera diferenciada, Lovitz (2007, pp. 3-4) señala que este término ecoterrorismo nació a principios de los noventa con la aprobación de la AEPA [Animal Enterprise Protection Act] y se confirmó posteriormente en una audiencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos cuyo título era «Actos de Terrorismo cometidos por organizaciones ambientales radicales», porque se calificaban estos actos como ecoterrorismo. Entre los múltiples asistentes a esa reunión hubo grandes empresarios, políticos republicanos, detectives infiltrados, pero no hubo activistas medioambientales.

machista, terrorismo patronal) que reflejan cuestiones relevantes sobre la igualdad entre mujeres y hombres o sobre la flexibilización de los derechos laborales; sin embargo, estos dos últimos asuntos no requieren una categorización tan grave para fomentar una mejora en su regulación legal así como en su aplicación efectiva.

Expresado de otra manera, emplear la palabra ecoterrorismo para los daños ambientales ocasionados por el Estado y/o las empresas es criticable, porque para proteger la naturaleza y/o los animales con las normas penales no es necesario emplear el término jurídico de terrorismo: calificar como terroristas los atentados contra la naturaleza o los animales no protege de manera más eficaz y efectiva dichos bienes, y sería mucho más práctica una política criminal adecuada centrada en la relación del derecho penal con el derecho administrativo y con base en los datos empíricos aportados por la criminología.

La radicalización de estos grupos ecologistas y animalistas se deduce de su defensa de las “acciones directas”, esto es, crear un malestar en la sociedad para que ésta reaccione ante los graves problemas que sufre la naturaleza. Esta técnica de acción directa se suele ejecutar mediante actuaciones legales, por ejemplo, manifestaciones, boicots, desobediencia civil; sin embargo, también se puede ejercitar mediante actos ilegales como el vandalismo o delitos que afectan al derecho de propiedad.

En otras palabras, la radicalización de estos grupos ambientalistas o animalistas queda demostrada en lo que se conoce como “ecotaje”, o la realización de actos de sabotaje ambiental, que se lleva a cabo mediante actividades criminales contra grupos empresariales y el gobierno con el objetivo de reducir las injusticias

medioambientales, ante la incapacidad de poder cambiar las normas sociales de las personas (normas sociales que han acabado contribuyendo a la destrucción del planeta) mediante otros métodos políticos como la votación a partidos políticos verdes o la firma de peticiones, luchando frente al gran poder cultural y económico que tienen algunas grandes empresas (Goodman, 2008; Smith, 2014). Este tipo de actividad se despliega, entre otras, en las siguientes organizaciones o grupos: la Milicia de los Derechos de los Animales, la Brigada Revolucionaria de la Liberación de Animales, Earth First!, Frente de Liberación Animal (*Animal Liberation Front* [ALF])⁸ y el Frente de Liberación de la Tierra (*Earth Liberation Front* [ELF]). Algunas de estas organizaciones se califican como terroristas en Estados Unidos, y como extremistas en la UE, utilicen o no la violencia.

Entorno

Hace 30 años, con el auge de las políticas ecológicas, cuando términos como desarrollo sostenible empezaban a formar parte del derecho internacional, y también aparecía en los Tratados Fundacionales de la Comunidad Europea, como el Tratado Maastricht, o cuando se comenzaba a mencionar en términos económicos la fiscalidad ambiental, comenzó también la persecución —o en ocasiones la campaña contraria— de los activistas medioambientales o animalistas (Lovitz, 2007).

8 De acuerdo con Goodman (2008), los integrantes del ALF liberan y rescatan animales como coyotes, gatos, perros o ratones, tomando en consideración que estos actos de “liberación” se categorizan como delitos o daños contra la propiedad, además de destruir o dañar los aparatos que se emplean sobre los animales. En ocasiones también incendian laboratorios y edificios sin que haya personas en su interior.

La mayor persecución de estos movimientos se da a finales del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, coincidiendo en el tiempo con los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. En esta etapa se presta una mayor atención a individuos o asociaciones que cuestionan el modelo económico vigente en una sociedad caracterizada por sufrir miedo y sentirse en riesgo frente a fenómenos inesperados como desastres naturales o ataques a la seguridad nacional (Sauvant et al., 2016).

Este fenómeno ha pasado a conocerse como el *Green Scare*⁹, por su similitud con el conocido fenómeno de *Red Scare*, esto es, la persecución que sufrió el comunismo en los años cuarenta y cincuenta en Estados Unidos (Loadenthal, 2013a; 2013b), en un contexto en el que es cada vez más frecuente que se criminalice a diferentes movimientos sociales (Ellefsen, 2012).

Definición

Antes de proceder al estudio más específico de este fenómeno, se hace necesario realizar una aclaración: en la doctrina no siempre se diferencia entre ecoterrorismo y terrorismo animalista, de modo que se emplea el término ecoterrorismo en muchas ocasiones para referirse a ambos grupos (Lovitz, 2007). A *contrario sensu*, como posteriormente se verá, la European Union's Law Enforcement Agency (Europol) sí distingue en sus informes entre ambientalistas y animalistas.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define el ecoterrorismo como

9 Según Yates (2011), para hacer aún más detestable su imagen, en los medios de comunicación se emplea un lenguaje similar al empleado contra los terroristas yihadistas.

el uso o la amenaza de emplear violencia categorizada como penal en contra de víctimas inocentes o contra la propiedad por un grupo infranacional medioambiental por razones medioambientales, o la acción está dirigida contra una audiencia más amplia que el objetivo, a veces de carácter simbólico”¹⁰. (como se citó en Lovitz, 2007, p. 80; v. t. Loadenthal, 2013b, p. 6)

Según el parecer de Lovitz (2007), el ecoterrorismo es

Amenazas y actos de violencia (tanto contra la propiedad como contra las personas), sabotaje, vandalismo, daño de las propiedades e intimidación cometidas en nombre del medio ambiente, y delitos cometidos en contra de las empresas y de las agencias u organismos públicos, cuya intención es interferir en las actividades, o evitarlas, que son supuestamente perjudiciales para el medio ambiente.¹¹ (p. 80)

Rasgos principales

La mayoría de activistas ambientales y animalistas llevan a cabo una acción legal y no violenta, pero existen grupos más radicales, que aun siendo también pacíficos, en ocasiones emplean técnicas violentas mediante la comisión de delitos como incendios intencionados, acoso

10 “The use or threatened use of violence of a criminal nature against innocent victims or property by an environmentally-oriented, subnational group for environmental-political reasons, or aimed at an audience beyond the target, often of a symbolic nature.” (Traducción propia)

11 “Threats and acts of violence (both against people and against property), sabotage, vandalism, property damage and intimidation committed in the name of environmentalism” and “crimes committed against companies or government agencies and intended to prevent or to interfere with activities allegedly harmful to the environment.” (Traducción propia)

a determinados trabajadores a través de llamadas y correos electrónicos, el jaqueo de páginas webs, asaltos, amenazas violentas, intrusiones en propiedades privadas, sabotajes de equipos, robos, así como obstrucción y difusión de datos privados, infracciones administrativas o civiles como arrojar pintura sobre peletería y pintar grafitis, e incluso conductas vandálicas (Cooke, 2013; Gruenewald et al., 2015; Loadenthal 2013b; Sauvart et al., 2016).

Unos de los grupos ambientalistas terroristas más característico es el ALF, que lo conforman pequeños grupos autónomos y descentralizados, pero sin una estructura jerarquizada. En esta organización, cualquier persona puede ser considerada como miembro del grupo siempre y cuando lleve a cabo sus acciones de acuerdo con los parámetros¹² de la ALF, donde es destacable la obligación de no herir ninguna vida humana o animal (Hirsch y Mudde, 2014; McCoy, 2007).

Hay que subrayar que la mayoría de los sujetos pertenecientes a estos grupos llevan a cabo actuaciones espontáneas o sin coordinación, individualmente y en grupos de 3 o 5 personas, siendo su técnica la de “resistir sin líder”; en consecuencia, muchos colaboran sin conocerse o establecen conexiones entre ellos, lo que a su vez permite la conexión con otras organizaciones ambientales (Hirsch y Mudde, 2014). Con una estructura

¹² De acuerdo con Goodman (2008), las pautas que sigue la ALF se podrían resumir de la siguiente manera: liberar a los animales de lugares donde abusan de ellos, por ejemplo, laboratorios, granjas y peleterías y devolverlos a un lugar donde puedan habitar con tranquilidad; causar daños económicos a aquellos que se benefician de la explotación y el sufrimiento animal; publicar las atrocidades que se cometen contra los animales en lugares privados mediante las acciones directas no violentas y la liberación; ejecutar todas las medidas necesarias para no causar daños a animales humanos y no humanos; y, para concluir, analizar las ramificaciones de todas las acciones propuestas y nunca generalizar cuando cierta información específica esté disponible.

jerárquica tan reducida, se hace más complejo detectarles y enjuiciarles, y además logran movilizar a un mayor número de simpatizantes (Sauvant et al., 2016).

Algunos autores han señalado que muchos de estos sujetos son captados mediante redes personales y se organizan o trabajan en grupos de número reducido de personas, y muchos de ellos no habían participado en las actividades del grupo antes de cometer un delito de terrorismo, por lo que se trataría de ataques descoordinados. El objeto habitual de sus acciones suelen ser aquellos lugares que no requieren permisos para acceder, donde no concurren personas, preferiblemente en la noche y sin la existencia de medidas de seguridad, piénsese en negocios y empresas agrarias locales, todo con el fin de evitar dañar a seres humanos (Gruenewald et al., 2015).

Especial referencia a los Estados Unidos de América

En los Estados Unidos de América este tipo de terrorismo se enmarca en la categoría de terrorismo doméstico¹³ y se considera como uno de los más peligrosos, lo cual es llamativo dado que, en algún momento, se pudieron contabilizar hasta 700 grupos de odio entre los que se pueden encontrar neonazis, supremacistas, francotiradores, entre muchos otros sujetos (Lovitz, 2007;

¹³ Lovitz (2007), Salter (2011) y Smith (2014) recuerdan que la Patriot Act, aprobada en 2001 en Estados Unidos, define el terrorismo doméstico como «todos aquellos actos que están asociados con actividades criminales como potenciales actos de terror», por consiguiente, el terrorismo nacional supone llevar a cabo actividades que son peligrosas para la vida humana, que implican ejecutar acciones tipificadas en el Código Penal de la Federación o de cualquiera de los Estados, dirigidas a coaccionar o intimidar a la población civil, influir la política de un gobierno mediante la coacción o la intimidación o afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, asesinatos o secuestros, y ocurren dentro del territorio bajo jurisdicción de EE. UU.

Varnell, 2016). Lo cierto es que los grupos ecologistas y animalistas emplean la violencia sobre los objetos inanimados efectuando ataques sobre la propiedad privada, lo que refleja una forma de disidencia política no muy sencilla de ignorar. Por este motivo, el Gobierno de los Estados Unidos ha puesto especial énfasis en investigar y enjuiciar a estos grupos como parte de los diferentes tipos de terrorismo que se cometen a nivel nacional (Loandethal 2013a).

A estos grupos ambientales no solo se les cataloga jurídicamente como terroristas, sino que además los grandes medios de comunicación los presentan con esta etiqueta sin hacer ninguna distinción entre los diferentes tipos de actos que llevan a cabo. Conviene insistir en que estos grupos suelen estar formados por personas que se limitan, salvo muy contadas excepciones, a liberar animales, procurar el bienestar animal, promover dietas vegetarianas, entre otras conductas, y que, en la mayoría de las ocasiones, conscientemente no cometen delitos de lesiones ni homicidios (Cooke, 2013; Hirsch y Mudde, 2014; Loadenthal 2013a).

Estos grupos intervienen en agroindustrias (se entienden grandes granjas con animales como cerdos, terneras y pollos), en establecimientos de la industria textil (donde se trabaja con la piel de visones, reses, ovejas y otros animales) y, también, llevan a cabo actos en aquellos lugares de trabajo de la industria científica donde se utilizan monos, ratones y perros para experimentación científica, pero también para experimentación cosmética (Lovitz, 2007).

Dado el activismo de “acción directa” mencionado anteriormente, que generó grandes pérdidas a las empresas agroalimentarias y farmacéuticas, a empresas

dedicadas al petróleo e incluso a entidades institucionales, el Congreso de Estados Unidos aprobó unas normas de carácter federal que categorizan como terroristas actos contra la propiedad privada o daños que anteriormente no recibían tal calificación jurídica (Loadenthal, 2007). Más aún, desde el 11 de septiembre de 2001, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a aumentar el presupuesto federal, ha elaborado más tipos penales e instaurado nuevas agencias y persigue con mayor fuerza a los terroristas nacionales (Varnell, 2016).

El desarrollo legislativo para la persecución del ecoterrorismo y el terrorismo animalista fue el siguiente: en primer lugar, se aprobó en 1992 la Animal Enterprise Protection Act (AEPA), que supone una enmienda al Código Penal Federal (Goodman, 2008; Hirsch y Mudde, 2014; McCoy, 2007). Esta norma, en sus secciones 2 y 43, define como terrorismo animalista contra las empresas aquel que:

Intencionalmente daña o causa la pérdida de cualquier propiedad real personal (incluyendo animales o registros) empleados por una empresa que trabaja con animales o cualquier propiedad inmueble o personal de una persona o entidad que tenga una conexión, relación o transacción con una empresa que trabaja con animales¹⁴.

14 "Intentionally damages or causes the loss of any real or personal property (including animals or records) used by an animal enterprise, or any real or personal property of a person or entity having a connection to, relationship with, or transactions with an animal Enterprise" (Traducción propia). Según Smith (2014, pp. 61-62), como empresas que trabajan con animales quedan comprendidas: a) cualquier empresa comercial o académica que usa o vende productos animales con ánimo de lucro, para alimentación o producción de fibra, agricultura, educación, investigación o ensayo; b) un zoo, aquarium, refugio de animales, tienda de animales, criaderos de animales, peleteros, circos, rodeos o cualquier otro evento legal donde compitan animales; c) cualquier feria o evento similar para fomentar las artes y las ciencias agrarias. Además, las penas incluyen la multa, siempre que el daño comprenda como mínimo una cantidad de 10.000 dólares, y/o pena de prisión desde un año hasta 20 años, tomando en cuenta si se han producido lesiones o alguien ha fallecido.

En segundo lugar, posteriormente a la AEPA, se aprobó la Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (en adelante, la Patriot Act) con la que se permiten las escuchas telefónicas y la lectura de correos electrónicos de los activistas de los grupos ambientales, siempre que se tenga sospecha de su participación en actividades de terrorismo, con lo cual se redefine el concepto de terrorismo mediante el añadido de la destrucción de la propiedad como actividad terrorista (Hirsch y Mudde, 2014; Smith, 2014).

Después, en 2002, se aprobó la Support Anti-Terrorism by Fostering Effective Technologies Act o la “Safety Act”, la cual establece la creación de una base tecnológica para las políticas antiterroristas y para gestionar el riesgo y los litigios (Smith, 2014).

Para concluir con este desarrollo legislativo, en 2006 se aprobó la Animal Enterprise Terrorist Act (AETA) que supone una ampliación de la AEPA (McCoy, 2007), y que incrementa las entidades que quedan protegidas por la normativa, dado que se comprende protegida cualquier persona que tenga relación o haga transacciones con empresas que comercialicen animales; también modifica el concepto de *perturbación física* por el más ambiguo de *interferencia* y comprende un mayor número de actuaciones, lo cual aumenta aún más la inseguridad jurídica, y concluye con la creación de una fuente propia de responsabilidad para cualquier sujeto que, interviniendo con una empresa animal, ponga a una persona en situación de poder ser lesionada o de fallecer (Hill, 2010; McCoy, 2007).

A partir de la legislación de los estados federados, de manera similar a lo que realizó la Confederación, se han

creado múltiples proyectos de ley que sancionan las actuaciones de estos grupos como terroristas, y que han sido impulsados y fomentados por grupos de presión constituidos por industrias farmacéuticas, empresas biomédicas o industrias agroalimentarias y propietarios de granjas y ranchos, y además utilizan términos jurídicos ambiguos como “la interrupción de actividades” que puede comprender desde caminar frente a una ventana con ropa llamativa, dar a conocer mediante panfletos el trato que reciben los animales hasta el reparto de octavillas en una asamblea pacífica celebrada junto a los centros de trabajo (Loadenthal 2013a; Lovitz, 2007).

Un sector mayoritario de la doctrina considera que la AETA y las normas similares de los estados federados están elaboradas con términos jurídicos ambiguos, lo que facilita que se produzcan inseguridades jurídicas al fundamentarse en opiniones y no en hechos. Además, es necesario considerar que todas las actividades que aparecen en estas normativas están amparadas por el ejercicio de la libertad de expresión, recogido en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos (Loadenthal, 2013b; Lovitz, 2007; McCoy, 2007).

Por lo que atañe a los atentados cometidos por estos grupos en Estados Unidos, según las bases de datos existentes, la evolución ha sido la que sigue: en primer término, en la década de los noventa, el número de atentados aumentó, siendo una cuarta parte de los atentados totales de terrorismo, pero sin ocasionar ninguna muerte; en segundo término, en la primera década de 2000, la mayoría de los atentados terroristas encuentran su motivación en ideas ambientalistas y/o animalistas, siendo cometidos por el ELF y el ALF para lograr la intimidación y el daño a la propiedad, aunque

en esta década tampoco se ocasionó ninguna muerte; en tercer y último lugar, desde el año 2010 en adelante se ha producido un descenso de los ataques originados por los ambientalistas (START, 2017).

Algunos autores destacan que al año siguiente de la aprobación y entrada en vigor de la AEPA y la AETA aumentaron las actividades de grupos como el ALF o el ELF, pero también cuando el término ecoterrorismo comenzó a tener una mayor relevancia, se produjo un descenso de las actuaciones (Loadenthal 2013b).

Desde este punto de vista, se puede señalar que las conductas ejercidas por estos activistas, salvo contadas excepciones,¹⁵ no ocasionan la muerte de las personas ni siquiera daños físicos, sino que son atentados contra la propiedad que deben ser sancionados, pero no categorizados como terroristas, ya que este delito siempre se considera más grave en su descripción, así como en sus consecuencias tanto legales como sociales, porque criminalizar una actuación como terrorista puede estigmatizar y traer como consecuencia que se dicten condenas judiciales a activistas que son menos violentos, aunque sí hacen parte del grupo violento y radical, y sus actividades quedan englobadas dentro de aquellas que pueden ejecutar grupos terroristas (Sauvant et al., 2016).

15 Entre las situaciones excepcionales, Eagan (1996) y Sauvant et al. (2016) destacan el empleo por la organización Earth First desde 1984 hasta 1990 de una técnica que consistía en introducir clavos largos de metal en los árboles, de modo que los leñadores que emplearan motosierras eléctricas al cortar los árboles podrían quedar lesionados o incluso sus vidas puestas en peligro (al entrar en contacto la motosierra con los clavos, estos explotaban). En relación con ello, Eagan (1996) ha denunciado atentados que sí han ocasionado la muerte de algunas personas, aunque, en este sentido, Hirsch y Mudde (2014) señalan que estos escasos ejemplos de homicidios suelen cometerlos personas que se relacionan de manera polémica con este movimiento.

Respecto a este último punto, sería aconsejable recordar que es el Estado quien desde hace tiempo tiene el monopolio de la narrativa de la violencia, y cuyos fines, junto a las empresas energéticas, agroalimentarias y de investigación médica, son mantener la acumulación de capital, la defensa de la propiedad privada y la libertad de mercado mediante el discurso del terror. El pacto social en el que están fundamentados la mayoría de Estados de derecho en la actualidad les autoriza a poseer el monopolio del ejercicio de la violencia, por consiguiente, el Estado calificará como violencia toda aquella acción que no ejecute él mismo.

Ahora bien, en el caso medioambiental, se calificará como violencia todo aquel paradigma que ponga en duda la propiedad sobre la naturaleza y los animales, pues al etiquetarla como violencia se legitima, a su vez, la respuesta violenta del Estado (Loadenthal 2013a).

Actualmente, la sociedad y la legislación, y no solamente en los Estados Unidos de América, ya distinguen entre una disidencia adecuada, y que es tolerable, frente a aquella que se cimienta en movimientos de base que quieren hacer desaparecer el sistema tal cual se concibe hoy en día, así, los últimos movimientos de base citados consideran oportuna la desaparición del Estado, que definen como injusto porque no permite que todas las personas disfruten de los derechos humanos (Pérez, 2017; Salter, 2011).

Con esto se logra, finalmente, una censura a los sujetos que no viene externamente impuesta, sino que es aplicada por el sujeto mismo, por temor a que sus ideas puedan tener una persecución penal o por que pueda ser etiquetado

como terrorista,¹⁶ y dada la compleja diferenciación entre el discurso crítico que es aceptado por la mayoría de la sociedad y aquel discurso que resulta incómodo (Loadenthal 2013a; Salter, 2011).

En definitiva, se puede afirmar que a estas personas se las enjuicia como terroristas ya que cuestionan el orden socioeconómico vigente (Varnell, 2016), y el objetivo final de toda esta normativa es controlar y moderar la disidencia, haciendo cada vez más imposibles las ideas revolucionarias mientras que se genera un enemigo de la sociedad para justificar medidas represivas, que finalmente no solo afectan a ese enemigo de la sociedad, sino a muchos otros individuos (Loadenthal 2013a; Salter, 2011; Sauvart et al., 2016).

Políticas de la Unión Europea

En Europa, en las últimas dos décadas, también se ha extendido la criminalización de los movimientos que defienden el medio ambiente y los animales (Ellefsen, 2012 y Yates, 2011), aunque, ciertamente, a estos grupos se los califica como movimientos extremistas y la denominación de ecoterrorismo apenas se emplea (Hirsch y Mudde, 2014).

Estos grupos ambientalistas y animalistas en Europa suelen denunciar las prácticas que habitualmente efectúan las empresas, las cuales en ocasiones vulneran

¹⁶ Sobre el efecto disuasorio que pueden ejercer las medidas establecidas por el Gobierno de Estados Unidos para disuadir a ecoterroristas véase, en este sentido, dos estudios con un enfoque cuantitativo y cualitativo: Safer-Lichtenstein, A. (2017). An Explicit Consideration of Unintended Consequences from Counterterrorism Policy: The Case of Radical Eco-Groups, *Studies in Conflict & Terrorism*, 42(4), 407-428 y Yang, S.M. y Jen, I.C. (2018). An Evaluation of Displacement and Diffusion Effects on Eco-Terrorist Activities After Police Interventions. *Journal Quantitative Criminology*, 34, 1103-1123.

las directivas y reglamentos emanados de Europa que recogen el tratamiento que debe darse a los animales (Ellefsen, 2012).

Las nuevas normas penales nacen cuando es evidente la represión que acarrearán las anteriores para perseguir a la parte clandestina del movimiento ambiental o animalista que actúa ilegalmente. A pesar de ello, los estudios realizados por los movimientos sociales, además de diversos casos ocurridos en Europa e independientemente de quiénes sean los sujetos que no cumplen la normativa, muestran que todo el movimiento defensor del medio ambiente o de los animales queda afectado mediante sanciones desproporcionadas respecto a la infracción cometida (Ellefsen, 2012).

Al mismo tiempo, ha aumentado la cooperación internacional de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad estatales que controlan los movimientos sociales calificados como ambientalistas y animalistas extremistas; sin ir más lejos, se han efectuado numerosos informes que analizan o evalúan los riesgos de seguridad, en los cuales se involucra a los movimientos radicales en defensa de los animales, pero sin ser categorizados como terrorismo. Junto a ello, hay que destacar que numerosas empresas de seguridad privada también reúnen información sobre activistas ambientales y animalistas, para posteriormente comerciar dicha información a empresas afectadas por las actuaciones de dichos activistas, o a terceros interesados (Ellefsen, 2012).

Con relación a este tema, se tienen que mencionar los informes anuales sobre la Tendencia y Situación de Terrorismo (TE-SAT, por sus siglas en inglés)¹⁷ en la UE

¹⁷ Véase EU TERRORISM SITUATION & TREND REPORT (TE-SAT). Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/tesat-report#fndtn-tabs-0-bottom-2>

que realiza la Europol. En estos informes se indica que el extremismo o terrorismo que se fundamenta en la protección del medio ambiente o en la defensa de los derechos de los animales se integra en el *Single Issue Terrorism* o terrorismo de una cuestión determinada. De acuerdo con la Europol (2008, p. 10), este tipo de extremismo queda definido de la siguiente manera: “la violencia cometida con el deseo de cambiar una política específica o una práctica en una concreta sociedad. Este término generalmente se emplea para describir a los grupos terroristas que defienden el medio ambiente y los derechos de los animales.”¹⁸ (Traducción propia).

Los actos que se ejecutan no tienen forma de ataques terroristas, sino que, de forma similar a lo que ocurría en Estados Unidos, se trata de delitos contra la propiedad, incendios, intimidación y amenazas contra las propiedades de las empresas o los trabajadores o las personas que están relacionadas con dichas empresas, por lo general industrias farmacéuticas, peleterías, empresas de investigación, agroalimentarias, energéticas, nucleares, etc. (Europol, 2013; 2018; 2019).

Las organizaciones que principalmente actúan en Europa son la ALF, la ELF, National Anti-Vivisection Alliance (NAVA) y Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC). En los últimos años cobran relevancia las “campañas de desinformación” que efectúan estos grupos por medio de redes sociales o de internet (Europol, 2012; 2017).

Para concluir, los informes de la Europol han empezado a recoger una serie de comportamientos vigilados y controlados, como pueden ser protestas pacíficas,

¹⁸ “Is violence committed with the desire to change a specific policy or practice within a target society. The term is generally used to describe animal rights and environmentalist terrorist groups”.

reivindicaciones contra el cambio climático y otros asuntos medioambientales en situaciones en las que no se ha ejecutado fuerza sobre las cosas o daños (Europol, 2013).

Recepción en España

En España no se han estimado como terroristas las acciones que llevan a cabo los grupos ambientalistas y/o animalistas, aunque en ocasiones se criminalicen,¹⁹ en consecuencia, no se puede mencionar allí la existencia de ecoterrorismo o terrorismo animalista como tal (Godoy, 2018).

19 Se citan los siguientes ejemplos de la prensa: Rejón, R. (2014, 6 de diciembre). "Juicios, multas, vigilancia: crece el acoso contra el movimiento ecologista". *elDiario.es* [Internet]. http://www.eldiario.es/sociedad/acoso-conta-movimiento-ecologista_O_331767431.html y "Archivada querella contra un bloguero que criticó la mina uranio en Salamanca" (2018, 21 de enero). *La Vanguardia*. <http://www.lavanguardia.com/vida/20180123/44241086562/archivada-querella-contra-un-blogueroque-critico-la-mina-uranio-en-salamanca.html>. Lo más cercano a considerar como terrorista a un grupo vegano ha sido el caso de "Straight Edge Madrid" desarrollado en la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1.ª, Sentencia 28/2018 de 26 Jul. 2018, Rec. 7/2016, LA LEY 87438/2018, Poveda Peña, Nicolás, ponente. Según la prensa, véase "La Fiscalía pide dos años de cárcel por terrorismo para los anarquistas veganos" (2018, 18 de mayo). *ELPLURAL.COM* [Internet]. https://www.elplural.com/sociedad/la-fiscalia-pide-dos-anos-de-carcel-por-terrorismo-para-los-anarquistas-veganos_128152102 y Domínguez, I. (2018, 26 de julio). "Absuelto de enaltecimiento del terrorismo el anarquista vegano que pasó 16 meses en prisión". *El País.com* [Internet]. https://elpais.com/politica/2018/07/26/actualidad/1532619800_455742.html. A los integrantes de este grupo en Madrid se les acusa del delito de enaltecimiento del terrorismo por determinadas publicaciones en redes sociales; aunque, finalmente, se les absolvió, uno de los acusados tuvo que estar más de un año en prisión preventiva. Véase en este sentido, respecto a la criminalización que sufren estos activistas en Colombia, la siguiente información suministrada por la organización DeJusticia: Dejusticia (2020, 1.º de mayo). Le damos la bienvenida a la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de DD.HH., Mary Lawlor. *Dejusticia.org* [Internet]. <https://www.dejusticia.org/le-damos-la-bienvenida-a-la-nueva-relatora-especial-sobre-la-situacion-de-los-defensores-de-ddhh-mary-lawlor/> y Rodríguez, C. y Baquero, C. (2020). Conflictos socioambientales en América Latina. El derecho, los pueblos indígenas y la lucha contra el extractivismo y la crisis climática. Buenos Aires: Siglo XXI y Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Rodri%CC%81guez-Garavito-Baquero-Di%CC%81az.-Conflictos-socioambientales-en-Ame%CC%81rica-Latina-web.pdf>

En otras palabras, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no se criminaliza al movimiento animalista o ambientalista con la categorización de terroristas.

Sin embargo, es necesario reseñar dos hechos. Por un lado, uno de los delitos que se recoge en el artículo 573 del CP es el delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, por consiguiente, en caso de incurrir en una de las actuaciones que abarcan los artículos 325, 326 y 326 bis con las finalidades que se enumeran en el artículo 573, se estaría ante una de las acepciones de terrorismo ambiental que, siendo totalmente diferente a la acepción principal que se ha desarrollado en este escrito, califica como terrorismo ambiental las actuaciones perjudiciales para la naturaleza y los recursos naturales cometidas por las empresas y/o el Estado. Se trata del supuesto en que un sujeto o varios sujetos, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, realicen vertidos sobre las aguas terrestres o el subsuelo que por sí mismos o conjuntamente con otras acciones causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire (art. 325.1), o bien cuando esos vertidos puedan alterar el equilibrio de los sistemas naturales (art. 325.2) siempre y cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Por otro lado, respecto del entendimiento que se ha otorgado en este texto al terrorismo animalista y/o ambientalista, es necesario destacar que en la normativa europea (Artículo 3.1 letras d, g y h, Directiva 2017/541 del Consejo y Parlamento) las destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, sistemas informáticos incluidos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; que los actos de liberación de sustancias peligrosas, o la provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas además de la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural básico, cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas, deben ser tipificados como delitos de terrorismo siempre que puedan perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional y se hagan con las finalidades enunciadas en el artículo 3.2 (Pérez, 2017, pp. 298 y 304).

Lo cierto es que se podría llegar a entender que el ordenamiento español ha transpuesto lo señalado por la Directiva 2017/541 del Consejo y Parlamento (Artículo 3.1 letras d, g y h) cuando apela a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra el patrimonio, y a los delitos de daños, de riesgo catastrófico y de incendios. Este hecho puede dejar entrever una técnica legislativa deficiente porque no se cumple con la finalidad de la Directiva, además de que se equiparan, en cuanto a gravedad, los homicidios y las lesiones con los delitos contra el patrimonio, con los delitos de daños, de riesgo catastrófico, medioambientales y de incendios sin víctimas humanas, lo que, en último término, contribuye

a hacer más compleja la aplicación de los delitos contra el medio ambiente, ya que en la mayoría de las ocasiones estos suelen considerarse de peligro hipotético.

De igual forma, habría que reseñar que las letras *g* y *h* del artículo 3.1 pueden entenderse como parte de aquella explicación del terrorismo ambiental que busca criminalizar las actuaciones que llevan a cabo las empresas. Es decir, los supuestos recogidos en estas dos letras de la Directiva 2017/541 buscan objetivos opuestos a los defendidos por grupos radicales ambientalistas y animalistas, como pueden ser proteger los derechos de los animales y proteger el medio ambiente.

Cierto es que la letra *d* del artículo 3.1 de la Directiva sí que recoge conductas similares a las de la normativa de los Estados Unidos de América, al plantear la criminalización como terroristas de las conductas que atentan contra la propiedad o causan daños.

Respecto a este último apunte, como ya se ha observado, de una manera general, los grupos ambientalistas y animalistas son perseguidos como terroristas por la comisión de delitos contra la propiedad, estragos o incendios. No obstante, esta calificación no parece ser la más adecuada, puesto que no se trata de un ataque indiscriminado contra los bienes jurídicos fundamentales de las personas y no se emplea la violencia con el fin de destruir el fundamento del Estado social y democrático de derecho, sino que se producen atentados contra la propiedad privada o delitos de daños y estragos que deben ser sancionados, sí, pero no como delitos de terrorismo. Debe insistirse en que su finalidad no es la de destruir un modelo de Estado (Pérez, 2017).

Llegados a este punto, quizás haya sido adecuado que no se haya extendido a España (Artículo 573 del Código Penal, véase nota 5) la figura de ecoterrorismo, tal y como se ha entendido en Estados Unidos, teniendo en cuenta que otras figuras sí lo han hecho, como los programas de cumplimiento penal empresarial. Y esto porque en España también podría perseguirse a grupos ambientalistas o ecologistas con base en este tipo penal; valga como ejemplo, el hipotético supuesto que la quinta, octava y novena conductas recogidas (delitos contra la propiedad, delitos de daños, y estragos e incendios, respectivamente) tuviesen la finalidad de suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones públicas o alterar gravemente la paz pública, podrían considerarse como delitos de terrorismo, pero se debe recordar que en Estados Unidos los ataques se dirigían contra grandes empresas y entidades públicas que experimentaban con animales o que contaminaban el medio natural.

Toda esta hipótesis se apoya en que la legislación española actual no exige la destrucción de un modelo de Estado que respete los derechos humanos, sino que, en palabras de Pérez (2017), sanciona “determinadas finalidades políticas concretas orientadas a las consecuencias” (p. 308), sin embargo, al confundir el medio, que es alterar la paz pública, con una de las finalidades del delito de terrorismo, hace aún más confusa la diferencia con los desórdenes públicos (Pérez, 2017).

En el supuesto de que alguien liberara algunas reses y peligrara la situación económica de la empresa o liberara los cachorros de perro con que se experimenta en un laboratorio o sustrajese los elementos con los que se construye la vía de un tren, si se considera que todos estos

comportamientos tienen la intención de lograr un cambio fundamental en las políticas de gobierno o generar una intimidación sobre la población, podría ser juzgado como terrorista.

Sin embargo, como se ha reiterado, esta interpretación no sería adecuada, ya que la finalidad de los grupos ambientalistas y/o animalistas no es ejercer una violencia indiscriminada contra los bienes fundamentales de las personas para lograr destruir un modelo de Estado social y democrático de derecho, sino que su objetivo es cambiar determinadas decisiones del gobierno o de algunas empresas que causan estragos y daños. Este tipo de conductas se pueden categorizar como delitos contra el patrimonio, de riesgo catastrófico o de incendios y se deben perseguir porque suponen ataques graves contra bienes jurídicos, pero como tipos penales contra la propiedad privada y la seguridad colectiva, y no como delitos de terrorismo, porque no pretenden impedir el ejercicio de derechos fundamentales en un Estado social de derecho. En suma, a estos grupos ambientalistas se les puede categorizar como movimientos radicales o extremistas, pero no como grupos terroristas.

Notas finales

De acuerdo con lo que se ha entendido como terrorismo en este escrito, las acciones de los activistas ambientales y animalistas no se deben categorizar como terrorismo, dado que no son ataques indiscriminados contra bienes jurídicos fundamentales con el propósito de eliminar los pilares de un Estado social y democrático de derecho ni pretenden evitar de manera violenta el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, lo que pretenden es modificar determinadas políticas. A

continuación, entonces, se realizan algunos comentarios sobre el tema tratado en este capítulo.

En primer lugar, durante los últimos años se ha recurrido al derecho penal para regular fenómenos como el radicalismo y el extremismo, confundiéndolos con la violencia política, y teniendo que hacerles frente con otro tipo de medidas preventivas. Esto conduce a que se deba aplicar el principio de precaución frente a las posibles consecuencias nocivas que crean algunos grupos adheridos a determinadas ideologías como el anarquismo y el ecologismo, que suelen ser molestos para el sistema económico y político vigente, por medio del uso de la figura del terrorista individual.

Como contrapropuesta a esta regulación del terrorismo, conviene que se incluya a un sujeto activo que, para ser juzgado como terrorista, se compruebe que sigue las directrices de una organización que emplea la violencia para destruir un Estado considerado justo que defiende la vigencia de los derechos humanos. Además, esa organización terrorista debe ejercer dicha violencia mediante ataques indiscriminados contra bienes jurídicos fundamentales de las personas.

En segundo lugar, organizaciones ambientalistas y/o animalistas llevan a cabo actuaciones legales en su mayoría, pero en ocasiones, para lograr sus fines, incurren en acciones ilegales que afectan principalmente al derecho a la propiedad o a la seguridad colectiva, pero sin afectar a las personas, los animales y el ambiente. En consecuencia, los hechos serán subsumibles en los delitos contra la propiedad, delitos de daños o estragos, pero no tendrán ese elemento de gravedad añadido como para ser calificados de terroristas.

En tercer lugar, en Europa los movimientos extremistas han comenzado a ser criminalizados, se confunde el extremismo con el terrorismo y así, en los informes de la Europol, se recopila información acerca de las conductas de los grupos ambientalistas y animalistas. Esto no debería ser así, puesto que, como ya se ha advertido, fenómenos diferentes se regulan de la misma manera, aunque no implican conductas de la misma gravedad.

Finalmente, aunque en España exista una persecución sobre los activistas ambientales, es necesario destacar que no se ha recibido ninguna denuncia de ecoterrorismo, lo cual se puede apreciar como positivo, y en el caso que dichos sujetos cometan delitos, se subsumirán en el tipo penal que proteja la propiedad o la seguridad colectiva, pero no se calificarán como terroristas.

Referencias

- Animal Enterprise Protection Act (AEPA), 43. Force, violence, and threats involving animal enterprises. From Title 18-Crimes and Criminal Procedure Part I-Crimes Chapter 3-Animals, Birds, Fish, and Plants. <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=&req=granuleid%3AUSC-prelim-title18-section43&f=&q=&num=0&hl=false&edition=prelim>
- Buell, L. (2009). What is called ecoterrorism. *Gramma: Journal of Theory and Criticism*, 16, 153-166.
- Código Penal Español. Ley Orgánica 2/2015 de 2015, 30 de marzo de 2015 (España).
- Cooke, S. (2013). Animal rights and environmental terrorism. *Journal of Terrorism Research*, 4(2), 26-36.
- Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º L 88/6, 31 de marzo de 2017.
- Eagan, S. P. (1996). From spikes to bombs: The rise of eco-terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 19, 1-18.
- Ellefsen, R. (2012). Green movements as threats to order and economy: Animal activists repressed in Austria and Beyond. En R. Sollund y R. Ellefsen (Eds.), *Eco-Global crimes: Contemporary Problems and Future Challenges* (pp. 181-205). Burlington: Ashgate Publishing.

Europol. (2008). *TE-SAT 2008: EU TERRORISM SITUATION & TREND REPORT*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/te-sat-2008-eu-terrorism-situationtrend-report>

Europol. (2012). *TE-SAT 2012: EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/te-sat-2012-eu-terrorism-situation-and-trend-report>

Europol. (2013). *TE-SAT 2013: EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/te-sat-2013-eu-terrorism-situation-andtrend-report>.

Europol. (2017). *TE-SAT 2017: EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-reportte-sat-2017>.

Europol. (2018). *TE-SAT 2018: EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018>

Europol. (2019). *TE-SAT 2019: EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat>

Godoy, M. A. (2018). La especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia medioambiental. En Academia de Oficiales de la Guardia Civil (Ed.), XXIX Seminario Duque de Ahumada. Medio Ambiente y Sostenibilidad: La Protección de la Guardia Civil (pp. 35-56). Madrid: Secretaría General

Técnica del Ministerio del Interior. http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Medio_ambiente_y_sostenibilidad_Seminario_Duque+de+Ahumada_126190795_web.pdf/482559cb-efc1-4d13-b6f1-815283611465

Goodman, J. S. (2008). Shielding Corporate interests from public dissent: An examination of the undesirability and unconstitutionality of “Eco-Terrorism” Legislation. *Journal of Law and Policy*, 16(2), 823-875. <http://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol16/iss2/7/>

Gruenewald, J., Allison-Gruenewald, K. & Klein, B. R. (2015). Assessing the Attractiveness and Vulnerability of Eco-Terrorism Targets: A Situational Crime Prevention Approach. *Studies in Conflict & Terrorism*, 38(6), 433-455.

Hill, M. (2010). The Animal Enterprise Terrorism Act: The need for a whistleblower exception. *Case Western Reserve Law Review*, 61(2), 649-678. <http://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol61/iss2/8>.

Hirsch-Hoefler, S. y Mudde, C. (2014). «Ecoterrorism»: Terrorist threat or political ploy? *Studies in Conflict & Terrorism*, 37(7), 586-603.

Loadenthal, M. (2013a). Deconstructing «eco-terrorism»: Rhetoric, framing and statecraft as seen through the Insight approach. *Critical Studies on Terrorism*, 6(1), 92-117.

Loadenthal, M. (2013b). The ‘Green Scare’& ‘Eco-Terrorism’: The Development of US Counter-Terrorism Strategy Targeting Direct Action Activists. The Terrorization of Dissent: Corporate Repression, Legal Corruption

and the Animal Enterprise Terrorism Act. https://www.researchgate.net/pub9619548_'The_Green_Scare'_Eco-Terrorism'_The_Development_of_US_Counter-Terrorism_Strategy_Targeting_Direct_Action_Activists/citation/download

Lovitz, D. (2007). Animal lovers and tree huggers are the new cold-blooded criminals?: Examining the flaws of ecoterrorism bills. *Journal Animal Law*, 3, 79-98.

McCoy, K. E. (2007). Subverting justice: An indictment of the animal enterprise terrorism act. *Animal Law*, 14(53), 53-71.

National Consortium for the Study of Terrorism and responses to Terrorism (START). (2017). *Ideological Motivations of Terrorism in the United States, 1970-2016*. https://www.start.umd.edu/pubs/START_IdeologicalMotivationsOfTerrorismInUS_Nov2017.pdf

Pardo, J. E. (2017). *Derecho del medio ambiente*. Madrid: Marcial Pons.

Paredes, J. M. (2016). Una modesta proposición para derogar los delitos de terrorismo (o casi). En A. I. Pérez y G. Portilla (Dirs.), *Terrorismo y contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis penal y político criminal* (pp. 61-86). Salamanca: Ratio Legis.

Pérez A. I. (2016). La criminalización del radicalismo y extremismo en la legislación antiterrorista. En A. I. Pérez y G. Portilla (Dirs.), *Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis penal y político criminal* (pp. 17-34). Salamanca: Ratio Legis.

Pérez, A. I. (2017). *El pacto antiyihadista: criminalización de la radicalización*. Valencia: Tirant lo Blanch, Ediciones Universidad de Salamanca.

- Salter, C. (2011). Activism as terrorism: The green scare, radical environmentalism and governmentality. *Anarchist Developments in Cultural Studies*, 1, 211-238.
- Sanz, N. (2016). *Política criminal. Actualizada a las reformas de 2015*. Salamanca: Ratio Legis.
- Sauvant, A., Fitzgibbon, W., & Nurse, A. (2016). Be afraid, be very afraid of... the environmental activist? Ideological war, coercive justice, and Orwellian dystopia. En G. R. Potter (Ed.), *The Geography of Environmental Crime* (pp. 59-88). Londres: Palgrave.
- Smith, P. A. (2014). *The axe without the handle: An exploratory analysis of eco-terrorism and its relationships to U.S. Public Policy towards terrorism: 1990-2010*. (Doctoral dissertation. Nova Southeastern University). http://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd/5
- Varnell, J. (2016). Speaking about "Eco-Terrorists": Terrorism discourse and the prosecution of Eric McDavid. *Green Theory and Praxis Journal*, 9(2), 29-54.
- Walters, R. (2017). Eco-crime and green activism. En T. Bergin y E. Orlando (Eds.), *Forging a socio-legal approach to environmental harms: Global perspectives* (pp. 220-236). Londres: Routledge.
- Yates, R. (2011). Criminalizing protests about animal abuse. Recent Irish experience in global context. *Crime, Law and Social Change*, 55, 469-482.

Impreso por:
Divegraficas S.A.S.
Cra. 53 #54-30 Medellín, Antioquia
Tel: 322 50 96

Este libro aborda el estudio de varios fenómenos, tensiones y conflictos políticos, económicos y territoriales actuales, tanto de carácter internacional como nacional, que se plantean desde la perspectiva de diferentes movimientos o grupos sociales.

El objetivo general es mostrar el origen y las consecuencias de dichas tensiones políticas, sociales y territoriales, indicar cuáles son los actores implicados en ellas y proponer alternativas para solucionarlas.